

Típo de documento: Tesis de maestría

Maestría en Ciencia Política

No se hereda ni se roba: retorno electoral de la Asignación Universal por Hijo en Argentina (2011-2015)

Autoría: Vidotto, Sofia Belén

Año de defensa de la tesis: 2021

¿Cómo citar este trabajo?

Vidotto, S. (2021) "No se hereda ni se roba: retorno electoral de la Asignación Universal por Hijo en Argentina (2011-2015)". [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella
<https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12018>

El presente documento se encuentra alojado en el Repositorio Digital de la Universidad Torcuato Di Tella bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR)
Dirección: <https://repositorio.utdt.edu>

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales
Maestría en Ciencia Política

No se hereda ni se roba

Retorno electoral de la Asignación Universal por Hijo en Argentina (2011-2015)

Autora: Sofia Vidotto

Tutor: Germán Lodola

Firma del tutor

Junio, 2021

Resumen Ejecutivo

¿Quién se beneficia electoralmente de la implementación de políticas sociales? ¿Son capaces los candidatos a la presidencia de reclamar exitosamente el crédito por programas que no implementaron ellos mismos? Este trabajo explora el efecto de los programas de transferencia monetaria condicionada (TMC) en las elecciones presidenciales de América Latina. Confirma el efecto positivo que estas políticas generan en el corto plazo, pero analiza un fenómeno virtualmente inexplorado por la literatura existente: su efecto temporal decreciente. A medida que pasa el tiempo, los receptores de estos programas normalizan la percepción del beneficio y dejan de preocuparse por una posible suspensión del mismo si no existe apoyo electoral por el candidato o partido que lo implementó inicialmente. El argumento se pone a prueba para la Asignación Universal por Hijo en las elecciones presidenciales de 2011 y 2015 en Argentina. Los datos utilizados corresponden a la encuesta LAPOP 2012 y 2017 y son procesados con *matching genético*, una técnica cuasi experimental que reduce los problemas de inferencia causal que suelen generar los estudios observacionales. Los resultados muestran que existe un efecto positivo de la Asignación Universal por Hijo en la elección de Cristina Kirchner como presidenta en 2011. Sin embargo, este efecto se diluye para el candidato de su partido, Daniel Scioli, en las elecciones inmediatamente posteriores. Los hallazgos confirman que los programas de TMC impactan positivamente en los resultados electorales de corto plazo. Sin embargo, su impacto se pierde cuando el candidato que los implementó ya no gobierna. La literatura que explora los motivos detrás de este fenómeno sugiere que la conducta favorable al Ejecutivo podría explicarse por diferentes factores. Mientras que las TMC podrían afectar la percepción sobre la economía personal y la confianza en el presidente en el corto plazo, aumentando el bienestar material de los beneficiarios, en el largo plazo los beneficiarios perciben la recepción del programa como un derecho adquirido, cuya continuidad no depende de un apoyo electoral. En este contexto, es esperable que los candidatos que no lo implementaron sean incapaces de retener el efecto positivo de sus predecesores.

Índice

1. Introducción	5
2. Retorno Electoral de las Transferencias Monetarias Condicionadas	7
3. Asignación Universal por Hijo en Argentina	11
4. Datos y metodología	16
5. Análisis empírico y resultados	21
6. Conclusión	29
Anexos	32
Bibliografía	44

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a Germán Lodola, director de esta tesis. Sus recomendaciones y sugerencias contribuyeron a mejorar el contenido de este trabajo en todos sus aspectos. También estoy muy agradecida con Guadalupe Dorna, quien me guió en el abordaje metodológico de esta tesis, siempre con gran predisposición, claridad, y una sonrisa, y a Paula clerici, cuyos comentarios y sugerencias detalladas ayudaron a mejorar sustantivamente la versión final del proyecto. No puedo dejar de nombrar a Carlos Freytes y a Sara Niedzwiecki, con quienes he discutido reiteradas veces sobre mis intereses de investigación. Les agradezco infinitamente las conversaciones y los intercambios sobre políticas sociales y expansión del estado de bienestar en la región, así como todas las oportunidades que me dieron para mejorar mi conocimiento sobre el tema.

Un agradecimiento especial a mis compañeros de la maestría, Camila Sabattini, Natán Skigin, Marina Porcel de Peralta, y Manuela Gonzalez Cambel. A todos ellos los admiro como profesionales, y los quiero como amigos. También estoy muy agradecida con Anabella Molina, gran amiga y colega, con quien tuve largas charlas sobre mi proyecto de tesis, y con quien compartí varios intercambios sobre políticas sociales en América Latina. Con ella también tuve la oportunidad de trabajar en implementación de políticas sociales en más de una oportunidad, y sabe lo mucho que me apasiona el tema. Finalmente, no imagino haber transitado esta etapa sin la paciencia y la dedicación de María Luz Carou, coordinadora de la Maestría. Sin ella, la experiencia de todos los estudiantes de maestría, sería mucho más caótica.

Mis agradecimientos finales son para mis padres, quienes financiaron gran parte de mi educación y me apoyan desinteresadamente en todo lo que hago. Estoy infinitamente agradecida de haber contado con su apoyo en todo momento. Soy una privilegiada por haber contado con innumerables recursos y oportunidades en este difícil camino que atravesamos todos aquellos que nos proponemos hacer ciencia.

1. Introducción

¿Qué efectos electorales generan las políticas sociales en el largo plazo? ¿Son capaces los candidatos a la presidencia de reclamar exitosamente el crédito por programas que no implementaron ellos mismos? Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) plantean desafíos interesantes para poner a prueba la conducta de los votantes en presencia de un beneficio material tangible con efectos positivos en las poblaciones vulnerables más allá del corto plazo. Caracterizadas por un pago mensual de dinero en efectivo a hogares pobres o extremadamente pobres, estos programas se implementaron por primera vez durante la década de 1990 en América Latina con el doble objetivo de combatir la pobreza e invertir en el capital humano de los menores en situación de pobreza y vulnerabilidad social. En 1995, Brasil fue el primer país en lanzar dos estrategias de este tipo a nivel municipal, seguido por México, con el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá) a nivel nacional en 1997. El éxito inmediato de dichas experiencias en materia de salud y educación llevó a que, rápidamente, otros países adoptaran iniciativas similares. Actualmente, prácticamente todos los países del mundo en desarrollo tienen algún tipo de programa de transferencia condicionada como parte de sus esquemas de protección social.

Existe sólida evidencia empírica de que las TMC lograron exitosamente combatir la pobreza y la desigualdad en las comunidades beneficiarias (Fiszbein y Schady, 2009; Soares et al., 2009; Stampini y Tornarolli, 2012), así como disminuir los índices de deserción escolar (Cardoso y Souza, 2004) y trabajo infantil (de Hoop y Rosati, 2014, Rosati, 2016; Skoufias, 2001). Aún así, la trayectoria clientelar de América Latina puso en duda que su lanzamiento fuera políticamente desinteresado y llamó la atención sobre un posible beneficio electoral para el *incumbent* por parte de los beneficiarios.

La literatura existente coincide en que las TMC generaron un retorno electoral positivo en el corto plazo, tanto en América Latina como en otros países que implementaron estrategias similares (Aytak, 2014; Baez et al., 2012; De la O, 2013; 2015; Díaz-Cayeros et al., 2009; Galiani et al., 2019; Hunter y Power, 2007; Labonne, 2013; Lício et al., 2009; Manacorda et al., 2011; Nicolau

y Peixoto, 2007; Nupia, 2011; Pop-Eleches y Pop-Eleches, 2012; Queirolo, 2011; Sewall, 2008; Soares y Terron, 2010; Zucco, 2008; 2011; 2013 ; Zucco y Power, 2011). Estos trabajos contrastan con una literatura comparativamente muy escasa sobre los efectos electorales que las TMC generan en el largo plazo. Los pocos trabajos que existen en la actualidad confirman que las estas estrategias generan retornos electorales positivos pero decrecientes en México (Díaz Cayeros et al., 2009), Brasil (Zucco, 2013) y Uruguay (Manacorda et al., 2011). Vale la pena mencionar que, en el caso de Brasil, los efectos favorables del *Bolsa Familia* sobre Lula y Dilma están relacionados exclusivamente con los candidatos, pero no con el partido, y difícilmente sobreviven más de dos elecciones presidenciales consecutivas (Zucco, 2013;2015).

El siguiente trabajo contribuye a comprender el rol de las Transferencias Monetarias Condicionadas en las elecciones presidenciales de largo plazo, a partir de la experiencia argentina, un caso virtualmente inexplorado por la literatura. Estima el retorno electoral de la Asignación Universal por Hijo (en adelante, AUH) en las elecciones presidenciales de 2011 y 2015. Dada la ausencia de una distribución aleatoria del programa, se utilizan datos de la encuesta de Latin American Public Opinion Porject (LAPOP), procesados con *matching genético*, una técnica cuasi experimental que permite distinguir entre conductas electorales de beneficiarios y no beneficiarios en ambas elecciones, a partir de datos observacionales. Los resultados confirman que la AUH generó un retorno electoral positivo para Cristina Kirchner en las elecciones de 2011, pero no para su candidato, Daniel Scioli, en las elecciones presidenciales inmediatamente posteriores. En línea con los hallazgos de Zucco (2013; 2015), la AUH parece no tener un retorno electoral claro para el partido sino para el candidato que la implementó y no sobreviven para siempre. En un país de larga tradición clientelar y políticas públicas no programáticas, ¿cómo reaccionan los votantes frente a la recepción de un beneficio material tangible con efectos de largo plazo? ¿Es la AUH una inyección de dinero que promueve un voto egotrópico entre los beneficiarios? ¿O es percibida como un derecho adquirido cuya continuidad en el tiempo no depende su voto en las urnas? Tras estimar la conducta electoral de los beneficiarios en diferentes aspectos, este trabajo sugiere que ambos mecanismos podrían explicar la conducta de los beneficiarios a la hora de votar, aunque en diferentes momentos del

tiempo.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. El capítulo 2 ofrece una revisión general de la literatura sobre retorno electoral de las transferencias condicionadas de ingreso, tanto en el corto como en el largo plazo. El capítulo 3 analiza la evolución de la Asignación Universal por Hijo en la Argentina y el contexto en que se implementó el programa. El capítulo 4 introduce los datos y la estrategia metodológica seleccionada para poner a prueba el efecto electoral de la AUH en Argentina. El análisis empírico y los resultados se discuten en el capítulo 5. El capítulo 6 concluye.

2. Retorno Electoral de las Transferencias Monetarias Condicionadas

Hasta la década de 1990, el estado de bienestar en América Latina y el Caribe estuvo organizado en torno a un esquema de protección social vinculado a la condición laboral preexistente de los beneficiarios. Incluía principalmente cobertura de salud y pensión por vejez. Aunque estos esquemas fueron diseñados para reducir la vulnerabilidad de los trabajadores frente a los vaivenes del ciclo económico, la prevalencia de altos niveles de informalidad laboral en la región terminó por excluir a gran parte de los trabajadores de los beneficios sociales disponibles hasta el momento (Stampini y Tornarolli, 2012, p.2). Como resultado, la cobertura de estas iniciativas fue muy baja, y la capacidad de revertir los altos niveles de pobreza y desigualdad para la que habían sido diseñadas, poco eficiente.

Hacia la segunda mitad de la década de 1990, el estado de bienestar tal como se conocía en América Latina se expandió dramáticamente con la llegada de nuevas políticas que incluyeron a trabajadores informales tradicionalmente excluidos de los esquemas de protección social. El principal componente de esta innovación fueron los programas de Transferencia Monetaria Condicionada, o simplemente TMC. Desde el comienzo, estas se diferenciaron de los programas anteriores

en varios aspectos. En primer lugar, se trata de esquemas universales de combate a la pobreza, a los que potencialmente cualquiera que cumpla con los requisitos exigidos puede acceder. Esto es, aún cuando las TMC fueron pensadas para alcanzar a hogares vulnerables con determinadas características, la percepción del beneficio no depende de una condición laboral de los adultos como los programas de empleo de la década anterior, sino que siguen un criterio de necesidad de carácter universal. En segundo lugar, se cambió la tradicional administración descentralizada por una centralizada, donde el Ejecutivo -a través de organismos estatales- es el encargado de distribuir los montos de los programas directamente a los beneficiarios. Mientras que muchos de los programas anteriores habían sido administrados por ministerios y regían a nivel municipal o provincial, las TMC unificaron la política social al ser administradas directamente desde el nivel federal. En tercer lugar, se caracterizan por una amplia y eficaz cobertura de las poblaciones vulnerables a las que buscan alcanzar, que contrasta con la escasa cobertura y el criterio selectivo de los programas de empleo.

En 1995, Brasil lanzó los primeros programas de TMC a nivel subnacional: el programa *Bolsa Escola* lanzado por el gobernador del Distrito Federal, Cristovam Buarque (PT), y el programa *Renda Mínima Garantida (PGRFM)* implementado por el intendente de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB). Dos años más tarde, México implementó el *Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá)*, mundialmente conocido como *Oportunidades*, reconocido como el primer programa de TMC a nivel nacional. El éxito inmediato de ambos programas en materia de salud y educación llevó a otros países de la región y el mundo a adoptar estrategias similares. En la actualidad prácticamente todos los países de América Latina cuentan con algún tipo de programa de estas características como pilar de sus esquemas de protección social.

Las TMC representan una inyección de dinero en efectivo sobre los ingresos de familias pobres y extremadamente pobres (Díaz-Cayeros et al., 2009), con una clara atribución de responsabilidad política hacia quien los implementa. Aún cuando no responden a las típicas prácticas clientelares de la década de 1990, su lanzamiento estuvo acompañado de sospechas sobre su carácter política-

mente desinteresado. Tanto los medios de comunicación como los partidos políticos de la oposición pusieron la lupa sobre las TMC en América Latina como estrategias que los *incumbents* podrían utilizar para intentar mejorar su performance en las urnas. El programa de TMC más grande del mundo, *Bolsa Familia*, se conoció irónicamente como “Bolsa de Votos” (Lindert y Vincensini, 2010). Algunos analistas sostienen que el programa condujo a los votantes pobres de Brasil a hacer la vista gorda ante los cargos de corrupción contra el ex-presidente, Lula da Silva, y le garantizó su reelección en 2006 (Hunter y Power, 2007). En Ecuador, intensos debates rodearon el carácter clientelar del programa *Bono de Desarrollo Humano*, generando que los medios de comunicación se refieran a él despectivamente como “Bono de la Discordia” (Pavão, 2016). En México, reconocidas organizaciones no gubernamentales como Alianza Cívica y Fundar acusaron al Partido Acción Nacional (PAN) de haber manipulado el programa *Oportunidades* y el *Pronasol* para capturar votos en las elecciones de 2006, que de otra manera no hubieran obtenido (Díaz-Cayeros et al., 2009). En Colombia, el programa *Familias en Acción*, fue denominado “Dudas en Acción” y señalado por medios de comunicación como una poderosa estrategia del Ejecutivo para capturar votos (Pavão, 2016).

La mayoría de los trabajos existentes coinciden en que las TMC generan un retorno electoral en el corto plazo, favorable a los candidatos que las implementaron en un primer momento. Estos hallazgos han sido confirmados tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Los países más estudiados por la literatura, México y Brasil, dejaron en evidencia la importancia de *Oportunidades* y *Bolsa Familia* para la continuidad del PAN en el primero y la reelección de Lula Da Silva como Presidente en el segundo (De la O, 2013; 2015; Díaz-Cayeros et al., 2009; Hunter y Power, 2007; Lício et al., 2009; Nicolau y Peixoto, 2007; Nupia, 2011; Sewall, 2008; Soares y Terron, 2010; Zucco, 2008; 2011; Zucco y Power, 2011).¹ En Colombia, *Familias en Acción* tuvo

¹La evaluación de las experiencias en México y Brasil han arrojado resultados contradictorios. Por un lado, Green (2006) e Imai, King y Velasco Rivera (2017) sostienen que la implementación de Progresá no afectó el comportamiento de los votantes mexicanos que percibieron el beneficio, respecto de quienes no lo hicieron. Por otro lado, Bohn (2011; 2013) y Limongi y Guarnieri (2015) argumentaron que Bolsa Familia no tuvo un efecto electoral significativo sobre la reelección de Lula en 2006, sino que el resultado favorable al líder del Partido de los Trabajadores puede atribuirse a otros factores no relacionados con la percepción del beneficio.

un rol central en las elecciones presidenciales de 2010, no solo al aumentar la participación política de sus beneficiarios, sino también al generar un mayor apoyo por el partido que implementó y expandió el programa inicialmente (Baez et al., 2012). De manera similar, en Uruguay, los beneficiarios de las TMC fueron más propensos a votar por el Frente Amplio, respecto de quienes no percibieron ningún tipo de transferencia monetaria (Manacorda et al., 2011; Queirolo, 2011).

Estos resultados prevalecen más allá de América Latina. En Turquía, Aytak (2014) puso a prueba el retorno electoral de las TMC en sistemas multipartidistas. Sus hallazgos confirman que la distribución de estos beneficios en enclaves donde el ejecutivo enfrentaba un *challenger* ideológicamente cercano, ayudó al Ejecutivo a ganar las elecciones gracias al apoyo de los beneficiarios. Labonne (2013) analizó el efecto electoral del *Programa Pantawid Pamilyang Pilipino (4Ps)* en municipios de Filipinas. Los resultados muestran que los beneficiarios del programa fueron mucho más propensos a votar por el *incumbent* que los no beneficiarios en aquellos municipios de alta competencia partidaria donde el programa se implementó en todas las aldeas. En particular, la distribución del programa aumentó el voto por el *incumbent* 26 puntos porcentuales en dichos municipios (Labonne, 2013). De manera similar, Pop-Eleches y Pop-Eleches (2012) encuentran que los hogares que recibieron un beneficio monetario de estas características en Rumania, fueron 15.5 puntos porcentuales más propensos a inclinarse a votar por el gobierno que aquellos que no lo recibieron.

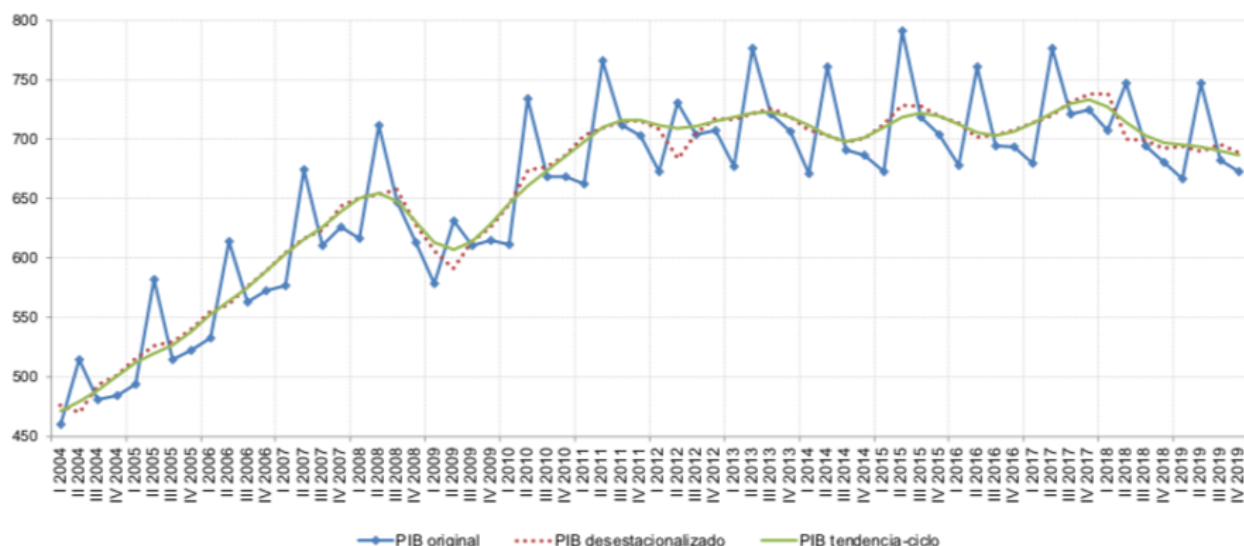
La literatura sobre efectos electorales de las TMC en el corto plazo, contrasta con un grupo comparativamente escaso de trabajos que analiza sus efectos en el mediano y largo plazo. En México, la implementación de los programas *Oportunidades* y *Seguro Popular* generó un impacto positivo en la elección de Vicente Fox como presidente en 2006, y también a su sucesor, Felipe Calderón, en 2012. El porcentaje de votantes beneficiarios que apoyó a este último fue, sin embargo, significativamente menor (Díaz-Cayeros et al., 2009). En Uruguay, el lanzamiento del programa transitorio *Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES)* tuvo efectos positivos para el Frente Amplio en 2005; efectos que permanecieron incluso luego de que el programa fuera suspendido en

2007 (Manacorda et al., 2011). Por su parte, Zucco (2013) encontró resultados similares relacionados al lanzamiento del programa *Bolsa Familia* en Brasil. La evidencia presentada por el autor sugiere que los beneficiarios de este último fueron más propensos a votar por Lula Da Silva en 2006, pero también fueron más favorables a apoyar a su sucesora Dilma Rousseff en 2010, aunque en menor proporción (Zucco, 2013). Asimismo, tal como demuestra Zucco, el efecto positivo del programa sobre los candidatos a la presidencia no se reflejó en un apoyo similar hacia el partido (Zucco, 2013), ni se mantuvo las elecciones presidenciales posteriores (Zucco, 2015). De esta manera, la evidencia sugiere que las TMC podrían generar retornos electorales positivos que no duran para siempre. Por el contrario, su impacto electoral positivo decrece (o incluso se diluye) entre los beneficiarios a medida que pasa el tiempo y que el partido o candidato que implementó el programa ya no gobierna.

3. Asignación Universal por Hijo en Argentina

El 10 de diciembre de 2007, Cristina Kirchner asumió la presidencia de la República Argentina, tras imponerse con el 45 % de los votos por encima de los candidatos Elisa “Lilita” Carrió (Coalición Cívica) y Roberto Lavagna (ex Ministro de Economía). Las elecciones de 2007 tuvieron lugar en un contexto marcadamente distinto al que había llevado a la presidencia Néstor Kirchner en 2003. Mientras que éstas últimas tuvieron lugar en un contexto de incertidumbre política y económica y alta fragmentación partidaria, Cristina Kirchner asumió su cargo en un período de crecimiento económico y fragmentación de la oposición, que hizo difícil pensar que otro candidato pudiera ocupar el cargo de presidente en 2011 (Levitsky y Murillo, 2008). La Figura 1 muestra la evolución de la economía en la Argentina entre el primer trimestre de 2004 y el último de 2019. Cabe mencionar que para cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en diciembre de 2003, la Argentina atravesaba un período de crecimiento económico crítico, solo superado por la crisis económica del periodo inmediatamente anterior. De hecho, éste sería el menor crecimiento de la Argentina en más de quince años. Entre 2003 y 2007, previo a la asunción de Cristina Kirchner, el

país vivió despegue económico extraordinario, acompañado por un aumento del consumo, y una marcada disminución del desempleo.



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019)

Figura 1: Evolución del PBI argentino en miles de millones de pesos (a precios de 2004)

Pese a una economía en recuperación y un escenario político estabilizado, la política social había quedado comparativamente más relegada entre las prioridades del Ejecutivo Nacional. Durante el gobierno de Néstor Kirchner prácticamente no se registraron inversiones en políticas de combate a la pobreza aún cuando otros países de la región habían implementado los programas de TMC con resultados positivos. De hecho, las políticas que existían en ese momento, como *el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD)*² y *el Programa Familias por la Inclusión Social (PF)*³,

²La situación de emergencia social originada en la crisis económica de 2001-2002 en la Argentina, motivó la implementación del *Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD)*, un programa de transferencias de ingreso de emergencia dirigido a jefes o jefas de hogar desempleados y con hijos menores de edad. Ejecutado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el PJJHD otorgaba un beneficio mensual de ARS \$150, monto que no fue ajustado desde el inicio del programa. Como contraprestación, se exigía a los beneficiarios que participaran en proyectos productivos, servicios comunitarios o cursos de capacitación. Por este motivo, el beneficio resultaba incompatible con tener un empleo en el mercado formal. Cabe mencionar que, aún cuando las contraprestaciones eran principalmente laborales y vinculadas a los adultos del hogar, el PJJHD incorporó como condicionalidad el cumplimiento de controles de asistencia escolar y de salud para los niños de los hogares beneficiarios (Cruces y Gasparini, 2008, p.5).

³El *Programa Familias* consistió en una transferencia monetaria a hogares con problemas de pobreza estructural. Comenzó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a comienzos de 2005, como una

permanecían vigentes desde el período anterior. Las principales novedades en materia de política pública se volcaron a la inversión en empleo público, y aunque los indicadores de pobreza y empleo mejoraron, esto estuvo vinculado más al crecimiento natural de la economía que a la inversión deliberada en políticas sociales orientadas a combatir la pobreza (Levitsky y Murillo, 2008).

Hacia 2008, el apoyo inicial que recibió Cristina Kirchner comenzó a perder fuerza, cuando la crisis económica mundial hizo que se desplomaran los precios de las materias primas. Este evento a nivel mundial tuvo dos consecuencias importantes para el país. Por un lado, afectó un componente central de la economía, al desplomarse el precio de los commodities. Por otro lado, alteró la estabilidad política del Frente para la Victoria, cuando la Presidenta se enfrentó abiertamente con el sector agropecuario por el cobro de impuestos a las exportaciones, en lo que se conoció como “Conflicto con el Campo”.⁴ El enfrentamiento por una ley que gravara las exportaciones agropecuarias terminó por perjudicar a la figura de Cristina Kirchner, cuyo partido perdió el apoyo durante las elecciones legislativas de 2009.

En este contexto, se implementó el programa de transferencia condicionada más importante de la Argentina, la *Asignación Universal por Hijo para la Protección Social* (AUH). Introducida mediante el Decreto 1602/09 que modifica la Ley de Asignaciones Familiares, la estrategia fue lanzada en octubre de 2009 para reemplazar al *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados* (PJJHD) y el *Programa Familias por la Inclusión Social* (PF), agrupando a sus beneficiarios bajo una única estrategia de combate a la pobreza.

Al igual que otros programas de transferencia condicionada, la AUH consiste un pago mensual

transformación del *Programa de Atención a Grupos Vulnerables*. El objetivo fundamental del programa fue promover la protección e integración social de las familias en situación de vulnerabilidad social, promoviendo el acceso a la salud y la educación de los niños y embarazadas en los hogares beneficiarios (Cruces y Gasparini, 2008, p.7).

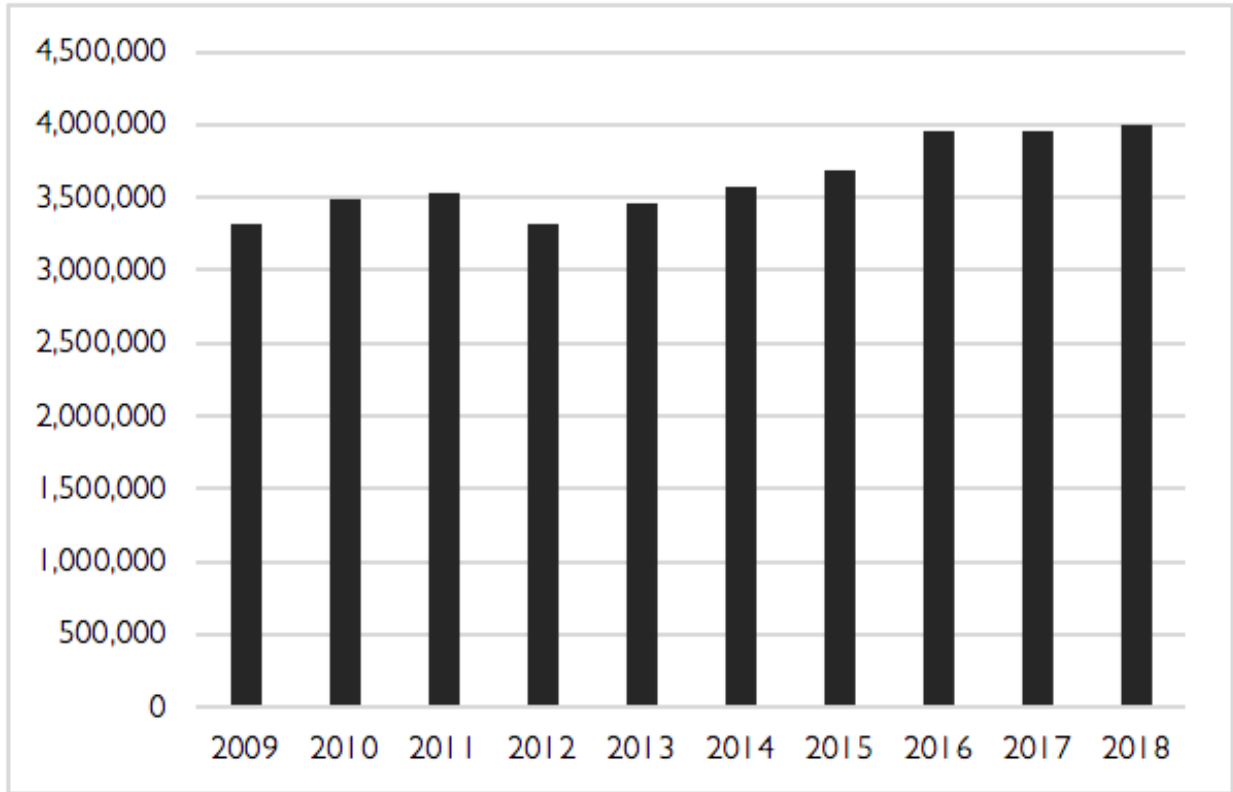
⁴En 2008, el gobierno nacional aprobó la resolución 125 para elevar el precio de las alícuotas de retenciones al sector agropecuario en Argentina. Inmediatamente se desencadenó una huelga de comercialización de granos, anunciada por la Mesa de Enlace Agropecuaria que agrupaba a las cuatro principales entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro). Posteriormente, los reclamos se tradujeron en cortes de ruta, movilizaciones, y cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires; y negociaciones fallidas que solo aumentaron el desacuerdo entre las partes. El conflicto finalizó con una votación empatada en el Congreso, donde el Vicepresidente de la Nación (presidente del Senado) definió con un voto desfavorable a la medida tomada por el propio Ejecutivo. Información disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/politica/la-125-el-conflicto-mas-fuerte-que-hizo-tuvo-cristina-kirchner-en-8-anos-de-gobierno.phtml>

en efectivo a hogares pobres o extremadamente pobres con menores a cargo, a cambio de ciertas contraprestaciones en materia de salud y educación.⁵ En 2020, el pago mínimo se estableció en USD 52,28 por cada niño menor de 18 años (hasta 5 hijos o menores a cargo), y USD 170,36 por hijo discapacitado sin límite de edad (ANSES, 2020)⁶. El 80 % del monto previsto se paga mensualmente a los titulares de la prestación, a través del sistema de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y el 20 % restante se deposita en una Caja de Ahorros a nombre del titular en el Banco de la Nación Argentina una vez que se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos correspondientes. La percepción del beneficio resulta incompatible con el cobro de cualquier suma originada por planes sociales u otras prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean nacionales, provinciales o municipales.

Aunque la AUH funcionó menos tiempo que otros programas de transferencia condicionada como *Oportunidades* (México) o *Bolsa Familia* (Brasil), el gobierno nacional estableció reglas operativas más estrictas que en programas anteriores y una implementación más robusta, que aumentó la cobertura, y tuvo un impacto positivo en la salud y educación de los menores (De la O, 2015). La Figura 2 muestra la expansión de la Asignación Universal por Hijo desde su implementación en 2009. Con un presupuesto inicial de USD 458.207.439 en 2009, el programa pasó de cubrir inicialmente a 3.431.667, a casi 4 millones en 2018.

⁵El programa está dirigido principalmente a niños con padres o madres desocupados, trabajadores no registrados, que trabajan en el sector informal de la economía sin acceso a los tradicionales beneficios de seguridad social. Producto de reformas posteriores a su implementación, también incluyó a hijas e hijos de monotributistas sociales, personal de servicio doméstico remunerado o trabajadoras de casas particulares (incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico), hijos de trabajadores temporarios registrados en el sector agropecuario y de adultos inscriptos en los programas Hacemos Futuro, Manos a la Obra, y otros programas de trabajo. En todos los casos, el Estado argentino exige que, tanto los padres como los menores, sean argentinos, residan en el país y tengan Documento Nacional de Identidad. En caso de extranjeros o ciudadanos naturalizados, los adultos receptores del beneficio deben contar además con tres años de residencia legal en el país, al momento en que se solicita el beneficio (ANSES, 2019). Por su parte, el órgano que implementa el programa -ANSES- establece que, en determinados casos, tanto la madre como el padre que vive con los menores puede cobrar directamente el beneficio sin contar con el consentimiento del otro padre o madre y sin necesidad de solicitar un embargo o tener sentencia judicial. Si bien no se ha establecido por ley, a quién debe otorgarse la titularidad del beneficio, implícitamente existe el consenso de otorgarlo preferentemente a las madres o tutoras en lugar de los padres o tutores.

⁶Información adicional disponible en: <https://www.anses.gov.ar/informacion/montos-de-asignacion-universal-por-hijo-y-por-embarazo-para-proteccion-social>. Tasa de cambio 1 USD = AR\$ 62.985 al 30 de diciembre de 2019. Recuperado de: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Planilla_cierre_de_cotizaciones.asp



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANSeS

Figura 2: Cobertura de la Asignación Universal por Hijo en Argentina (2009-2018) en cantidad de beneficiarios

Desde el comienzo, el lanzamiento del programa fue foco de críticas tanto desde la oposición como de gran parte de la opinión pública. En un contexto de crisis económica y fragmentación política, la AUH fue señalada como una estrategia del Ejecutivo para garantizar la reelección de Cristina Kirchner en 2011.

Los pocos trabajos que analizan este fenómeno sugieren que no existe un vínculo clientelar detrás de la distribución de la AUH. Por un lado, Lodola (2011) estimó los determinantes del voto por Cristina Fernández de Kirchner en 2011 con resultados que evidencian que la recepción de la AUH no fue un componente central del voto por Cristina Kirchner. Por otro lado, y consistente con otros casos en la región, la implementación del programa tampoco parece haber seguido una lógica clientelar (Lodola, 2011; Zarazaga, 2015). Tomando como referencia los programas asistenciales

anteriores, Zarazaga (2015) demostró que los tradicionales *brokers* o intermediarios políticos sí habían participado en la inscripción de beneficiarios a programas como *Argentina Trabaja*, pero no de la AUH. Estos resultados han sido confirmados tanto a nivel individual como a nivel agregado (Zarazaga, 2014), y sugieren que los beneficiarios de la AUH no parecen haber condicionado su voto guiados por el miedo a perder el beneficio si no apoyan a quien lo reparte. Sin embargo, estos resultados no excluyen la posibilidad de que los votantes apoyen al ejecutivo por una mejor situación económica personal.

¿Cómo votan los beneficiarios de *la Asignación Universal por Hijo* en Argentina? ¿Son capaces los candidatos a la presidencia de beneficiarse electoralmente por la existencia de una política social que no implementaron ellos mismos? Consistentes con los hallazgos de la literatura sobre TMC en América Latina, es esperable que la AUH tenga un retorno electoral positivo en el corto plazo, que no responde a una lógica clientelar sino a una mejora en el bienestar de los beneficiarios. Como sugieren varios trabajos (Hellwig, 2001; Dorussen y Taylor, 2002; Singer, 2011) los votantes más pobres suelen ser los más vulnerables a los vaivenes económicos. Por esta razón, es esperable que en momentos donde la economía no atraviesa un buen momento, la mejora en sus ingresos, favorezca la percepción de que el presidente tiene un buen manejo de la economía y aumente su confianza en la figura de Cristina Kirchner, al sesgar favorablemente su percepción sobre el Ejecutivo (Pacek y Radcliff, 1995; Singer, 2011). Ahora bien, es esperable que este apoyo positivo se debilite o desaparezca a medida que pasa el tiempo, donde la economía se estabiliza y el beneficio lo instala como un derecho adquirido entre los beneficiarios, cuya continuidad no depende de apoyar electoralmente al candidato o partido que lo implemento.

4. Datos y metodología

Para testear la hipótesis presentada se utilizan datos a nivel individual que provienen de las rondas 2012 y 2017 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)⁷. El proyecto

⁷Información adicional sobre el proyecto LAPOP disponible en <http://www.varnderbilt.edu/lapop>

tiene la ventaja de ser uno de los pocos conjuntos de datos de opinión pública que incluye una pregunta específica sobre recepción de la *Asignación Universal por Hijo* y distingue esta estrategia de otras transferencias gubernamentales de menor envergadura. Asimismo, se trata de la única herramienta disponible en Argentina que permite estimar los efectos electorales de programas de estas características, dado que incluye preguntas específicas sobre la recepción del programa, el comportamiento electoral de los encuestados y otras variables relevantes incluidas en el análisis, cuya incorporación en los modelos aumenta la robustez de los resultados y la confianza en el instrumento de medición. Finalmente, la encuesta se realiza regularmente en Argentina, lo que permite analizar la conducta electoral de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo más allá de una única elección presidencial.

Los programas de transferencias condicionadas como la AUH incluyen criterios de elegibilidad para distribuir sus beneficios, que están altamente correlacionados con una serie de variables socio económicas como sexo, nivel de ingreso, nivel educativo, cantidad de hijos menores de edad en el hogar y ocupación de los beneficiarios, que a su vez están asociados a la variable de interés (voto por el candidato del Frente Para la Victoria en elecciones presidenciales). Por esta razón, recurrir a una regresión múltiple para inferir el efecto causal del programa resulta problemático, en tanto esta estrategia metodológica –en principio más simple que otras- no permite aislar el efecto causal del programa de las variables por las que típicamente se controla el modelo (Zucco, 2013). Dicho de otra manera, correr una regresión múltiple que incluya como variable dependiente el voto por Cristina Kirchner y Daniel Scioli, como un factor independiente de la recepción (o no) de la AUH, dice poco sobre el efecto causal del programa en si mismo. Es esperable que, independientemente de recibir el beneficio, aquellos que son menos educados, que tienen menor nivel de ingreso, mayor cantidad de hijos -que son los más propensos a recibir la AUH dados los criterios de elegibilidad- hubieran votado por estos candidatos, incluso en ausencia del programa.⁸

Si bien hubiera sido deseable, como ocurrió con la experiencia de *Progres*a en México, el diseño original de la AUH no contempló la implementación de una prueba piloto que garantizara una

⁸Para un abordaje más detallado de la bases sociales del peronismo en Argentina, ver Lupu y Stokes (2009).

asignación aleatoria del programa entre la población elegible. De haber existido, se podría haber obtenido una distribución similar de hogares ó individuos en el grupo de tratamiento y el grupo de control, que fueran iguales (en promedio) en todas sus características de base, excepto en la recepción de la AUH. En este escenario, una comparación de las medias de los resultados del grupo de tratamiento y control permitiría estimar el efecto causal del programa sobre la conducta electoral de los beneficiarios.

De esta forma, podría pensarse el impacto del programa como la diferencia en los resultados para el mismo individuo con y sin participación en el mismo. Sin embargo, el problema fundamental de la inferencia causal da cuenta del hecho de que no puede observarse simultáneamente a un individuo (o unidad de análisis, en general) en dos estados diferentes (Holland, 1986) (en este caso, con y sin el beneficio de la AUH). En cualquier momento dado, una persona u hogar recibió el beneficio o no lo hizo.

Afortunadamente, existen métodos cuasi-experimentales que permiten rodear el problema y estimar el efecto causal de un programa como la AUH, al construir un grupo de control que reconstruye artificialmente el contrafáctico que no se puede observar en la realidad. Se utilizó *matching* para procesar los datos a nivel individual, una técnica que permite identificar para cada posible observación bajo tratamiento una observación ó par que no recibió el tratamiento, lo más similar posible en sus características observables. En términos de Gertler et al. (2011) encontrar una buena coincidencia o *match* cada participante del programa requiere “aproximarse lo más posible a las variables o determinantes que explican la decisión de ese individuo de inscribirse en el programa” (p.8). Lo que ocurre es que si la lista de características observables relevantes es muy grande -o si cada característica puede tomar muchos valores-, será difícil identificar un *match* adecuado para cada una de las unidades en el grupo de tratamiento. De hecho, a medida que aumenta la cantidad de características o dimensiones para las que se desea encontrar coincidencias entre los no tratados, se vuelve más difícil encontrar el par no tratado para cada unidad tratada. Esta dificultad puede ser parcialmente resuelta usando el Propensity Score Matching (PSM). En este enfoque, ya no es

necesario tratar de hacer coincidir cada unidad tratada con una unidad no tratada que tenga exactamente el mismo valor para todas las características observables. En cambio, se estima un índice de propensión a participar en el programa dadas las características observables de las unidades de análisis, que resume todas las características observadas que influyen en la probabilidad de participar en el programa. Una vez calculado el índice de propensión para todas las unidades, se busca para las unidades en el grupo de tratamiento (unidades que participan del programa), aquellas del grupo no tratado que tienen el puntaje de propensión más cercano. Estas unidades más cercanas en su índice de propensión se convierten en el grupo de control y se utilizan para producir una estimación del contrafáctico.

El siguiente trabajo utiliza *matching genético (Gen Match)*, una estimación desarrollada por Diamond y Sekhon (2013), que elimina la necesidad de corroborar los puntajes de propensión de manera manual e iterativa, al utilizar un algoritmo de búsqueda evolutiva que optimiza el balance de covariantes observadas y reduce el sesgo través del *match* entre unidades tratadas y no tratadas (Sekhon, 2011).

Para aquellas variables donde se observaron valores faltantes, se tomó la decisión de reemplazar los valores utilizando un mecanismo de imputación múltiple en lugar de simplemente eliminar los valores perdidos (*listwise deletion*), lo cual generaría una pérdida muy grande de datos que podría afectar las estimaciones de los resultados (Abadie e Imbens, 2016) (Anexo A). La imputación múltiple consiste en asignar m valores para cada elemento faltante y crear m conjuntos de datos completos para reemplazarlo. En estos conjuntos de datos, los valores observados son los mismos, pero los valores faltantes se completan con diferentes imputaciones para revelar los niveles de incertidumbre. Esto permite aplicar, luego y de manera conveniente, cualquier método estadístico que se hubiera utilizado si no hubiera habido valores perdidos en cada uno de los conjuntos de datos (King et al., 2001, p.53). Naturalmente, la pérdida de datos en gran volumen es problemática en cualquier escenario. Por este motivo, la imputación de datos puede volverse menos robusta a medida que el porcentaje de datos perdidos aumenta. Sin embargo, existe evidencia que sugiere

que, aún cuando puede no ser la opción ideal, la imputación múltiple es preferible a otros métodos como la eliminación por listas o incluso, la imputación simple (King et al., 2001).⁹

La variable dependiente corresponde a una pregunta sobre el voto a presidente en las elecciones de 2011 y 2015. La variable original fue recodificada como variable dicotómica y toma valor 1 si el encuestado votó por Cristina Kirchner en 2011 o lo hizo por su candidato a la presidencia en 2015, Daniel Scioli y 0, en caso contrario.¹⁰ La ronda de 2017 incluye una pregunta sobre el voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, pero no por el *ballotage*. Una particularidad de estas elecciones es que el candidato del FPV, Daniel Scioli, perdió en el *ballotage* contra Mauricio Macri, pero obtuvo un mayor porcentaje de votos en primera vuelta, es decir, fue el candidato que más votos recibió en las elecciones generales. Aunque sería ideal poder contar con preguntas que determinen la conducta de los votantes tanto en primera como en segunda vuelta, el hecho de que la pregunta refiera únicamente a las elecciones generales aumenta la confianza en la respuesta de los encuestados ya que es esperable que los votantes expresen un voto más sincero en esta instancia en comparación con el *ballotage* que se reduce a dos candidatos y el voto suele ser de carácter estratégico.

Para determinar si la AUH tuvo un efecto favorable al oficialismo, mediado por otros factores relevantes sobre la conducta de los votantes, se incluyeron variables adicionales, que reflejan la percepción de los beneficiarios sobre el manejo de la economía por parte del Ejecutivo¹¹, la confianza en el presidente, la creencia de que sus derechos están protegidos, y la percepción sobre la economía tanto nacional como personal, la corrupción y la simpatía partidaria (Anexo B).

Como variable independiente se utilizó una pregunta del cuestionario que distingue a los hoga-

⁹Para mayor información sobre cuándo resulta conveniente utilizar cada uno de estos métodos para disminuir los problemas de pérdidas de datos ver Abadie e Imbens (2016), King y Honaker (2010) y King et al. (2001)

¹⁰VB3. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2011? (2012). VB3N. ¿Por quién votó para Presidente en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales de octubre de 2015? (2017)

¹¹Aún cuando hubiera sido deseable incluir esta variable en ambos modelos, la pregunta correspondiente no se encuentra disponible en el cuestionario 2017, por lo que no fue posible verificar la percepción de los beneficiarios del programa sobre el manejo que el gobierno tuvo sobre la economía del país en esa instancia. La ausencia de una pregunta que indague específicamente por el manejo de la economía en manos del Ejecutivo en 2015 no resulta excesivamente problemática dado que ninguno de los candidatos postulados a la presidencia en ese momento persiguió la reelección en el cargo, como sí lo hizo Cristina Kirchner en 2011.

res según si algún miembro es beneficiario de la Asignación Universal por Hijo en Argentina de aquellos donde ningún miembro del hogar recibe el beneficio. Se trata de una variable dicotómica que recibe valor 1 para quienes respondieron afirmativamente a esta pregunta y 0, para los que expresaron lo contrario.¹²

5. Análisis empírico y resultados

El Cuadro 1 muestra la comparación del balance en las medias pre y post *matching* del grupo de tratamiento (beneficiarios AUH) y de control (no beneficiarios) para las elecciones presidenciales de 2011. Antes del *matching*, el grupo de tratamiento tiene, en promedio, menos años de educación, menor nivel de ingreso, menos años, y mayor cantidad de hijos menores de 13 años a cargo, respecto del grupo no tratado. Asimismo, se observan leves diferencias en ambos grupos en términos de raza y lugar de residencia de los encuestados. La información muestra que ambos grupos están desbalanceados, es decir, que presentan valores promedios disímiles entre sí en cada categoría, lo que puede alterar las estimaciones posteriores. Al balancear las muestras se garantiza que no existan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos para las categorías mencionadas.

El Cuadro 2 muestra la estimación del *matching* en las elecciones de 2011. El modelo incluye como variable dependiente principal si el encuestado voto por Cristina Kirchner para presidente en 2011 o no lo hizo. Se incluyen en el modelo otras variables que confirman que la recepción de la AUH tuvo un efecto estrictamente pro *incumbent*, es decir, que no impactó únicamente en el voto por Cristina Kirchner, sino que también mejoró la confianza en la presidenta, la percepción sobre el manejo de la economía y sobre su propia economía a nivel del hogar.¹³

¹²CT1B. Ahora, hablando específicamente sobre el Programa “Asignación Universal por Hijo”, ¿usted o alguien en su casa es beneficiario de ese programa? (LAPOP, 2012; 2017)

¹³B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente? N15. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual está manejando bien la economía? SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce meses? IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses? (LAPOP, 2012; 2017)

	Pre matching	Post matching
Educación		
Media tratamiento	9,31	9,31
Media control	10,73	9,54
Ingreso		
Media tratamiento	5,15	5,15
Media control	6,84	5,29
Edad		
Media tratamiento	35,29	35,29
Media control	43,43	35,17
Mujer		
Media tratamiento	0,58	0,58
Media control	0,48	0,52
Blanco		
Media tratamiento	0,47	0,47
Media control	0,64	0,47
Mestizo		
Media tratamiento	0,45	0,45
Media control	0,32	0,46
Nativo		
Media tratamiento	0,02	0,02
Media control	0,01	0,01
AMBA		
Media tratamiento	0,17	0,17
Media control	0,33	0,17
NOA		
Media tratamiento	0,20	0,20
Media control	0,11	0,20
NEA		
Media tratamiento	0,14	0,14
Media control	0,08	0,13
Cuyo		
Media tratamiento	0,10	0,10
Media control	0,07	0,09
Centro		
Media tratamiento	0,15	0,15
Media control	0,16	0,15
Hijos menores 13 años		
Media tratamiento	0,80	0,80
Media control	0,54	0,79

Cuadro 1: Balance pre y post tratamiento (CFK 2011)

	ATE	AI-SE	T-stat	p-value
Voto por CFK (2011)	0,097	0,048	2,029	0,065
Confianza en el Presidente	0,430	0,181	2,369	0,028
Protección de derechos	0,040	0,160	0,251	0,685
Manejo de la economía	0,469	0,169	2,778	0,019
Percepción economía nacional	-0,124	0,074	-1,664	0,108
Percepción economía personal	-0,214	0,069	-3,116	0,004
Percepción corrupción	0,150	0,073	2,075	0,128
N	1512			
Tratados	284			
Observados	284			

Cuadro 2: Genetic Matching - Efecto medio de tratamiento (ATE) (CFK 2011)

Los resultados del Cuadro 2 evidencian que ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo tuvo un impacto electoral positivo por Cristina Fernández de Kirchner en 2011 respecto de quienes no recibieron el beneficio. En particular, se estima que ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo aumentó, en promedio, casi un 10 % la probabilidad de votar por Cristina Fernández de Kirchner en 2011, respecto a no haber recibido el beneficio. Esta estimación resulta estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 90 %. Los hallazgos son consistentes con la literatura que sugiere que los beneficiarios de las TMC son más propensos a votar por aquel candidato que implementó el programa en un primer momento, corroborando el retorno electoral positivo en el corto plazo (Aytak, 2014; Baez et al., 2012; De la O, 2013; 2015; Díaz-Cayeros et al., 2009; Galiani et al., 2019; Hunter y Power, 2007; Labonne, 2013; Lício et al., 2009; Manacorda et al., 2011; Nicolau y Peixoto, 2007; Nupia, 2011; Pop-Eleches y Pop-Eleches, 2012; Queirolo, 2011; Sewall, 2008; Soares y Terron, 2010; Zucco, 2008; 2011; 2013 ; Zucco y Power, 2011).

El mismo modelo que muestra que la AUH tuvo un efecto sustantivo sobre otras variables, ofrece pistas de por qué podría ser el caso, que son consistentes con la literatura. En primer lugar,

los beneficiarios del programa mostraron 0.43 puntos porcentuales más de confianza en Cristina Kirchner como presidenta, en una escala de 1 al 7, donde valores más altos reflejan una mejor imagen de la mandataria, respecto de los no beneficiarios. La confianza en la líder del FPV y el reflejo en su voto en 2011, estuvieron acompañados de una mejor percepción sobre el manejo de la economía por parte del gobierno y una visión más favorable de la propia situación económica. En particular, los beneficiarios de la AUH percibieron un mejor manejo de la economía por parte del Cristina Kirchner de casi medio punto en una escala de 1 a 7, respecto de los no beneficiarios. Asimismo, los beneficiarios de la AUH se mostraron 0.2 puntos porcentuales más satisfechos con su propia situación económica en una escala de tres puntos, donde 1 refleja sentirse mejor respecto del año anterior y 3, peor. Dicho en una línea, los receptores de la AUH percibieron mejor su situación económica personal, respecto de los no beneficiarios. Estas estimaciones se observan con una confianza del 95 % y 99 %, respectivamente.

En conjunto, estos resultados, son consistentes con la literatura que sugiere que el apoyo electoral al *incumbent* y la experiencia financiera personal de los votantes son capaces de sesgar las percepciones de éstos últimos sobre la economía. Dado que las TMC han demostrado aumentar el voto por el candidato que las implementa, también podrían sesgar la evaluación que los votantes hacen sobre el manejo que el gobierno hace de la economía. Este sesgo podría explicarse por mejoras en las condiciones económicas de los beneficiarios generados por las propias transferencias de efectivo (Pavão, 2016, p.79). Siguiendo a la literatura sobre voto económico, es esperable que los votantes más expuestos a los vaivenes del ciclo económico, sean a quienes más les importa la economía (Hellwig, 2001; Dorussen y Taylor, 2002; Singer, 2011). Por ello, la implementación de políticas sociales que mejoran el bienestar de sectores vulnerables en momentos de crisis juega un rol central en estas explicaciones (Pacek y Radcliff, 1995; Singer, 2011), y podría indicar que el apoyo inicial a CFK entre los beneficiarios de la AUH está guiado por un voto egotrópico que relaciona la percepción del beneficio con una mejora en la propia economía de los hogares beneficiarios, y aumenta la confianza en su gestión. Estos resultados también coinciden con los mecanismos que encuentra Zucco (2013) para explicar el efecto decreciente del programa *Bolsa*

Familia en Brasil, y coincide con los hallazgos de la literatura sobre clientelismo en Argentina, que debilita la hipótesis alternativa de que el apoyo a CFK entre los beneficiarios responde a una lógica meramente clientelar (Zarazaga, 2014; 2015).

El Cuadro 3 muestra la comparación del balance en las medias pre y post *matching* del grupo de tratamiento y de control, tomando como referencia las elecciones de 2015. Antes del *matching*, el grupo de beneficiarios de la política social muestra, en promedio, menos años de educación, menores ingresos, menor edad, mayor cantidad de menores de 13 años a cargo y distinta proporción de personas que se autodefinen según su color de piel. Nuevamente, balancear las muestras es necesario para garantizar que no existan diferencias estadísticamente significativas entre el control y el tratamiento.

El Cuadro 4 muestra los resultados de la AUH en las elecciones presidenciales de 2015, utilizando el voto por Daniel Scioli como variable dependiente. Los resultados reflejan que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo no fueron más propensos a votar por Daniel Scioli en 2015 -el candidato de Cristina Kirchner para sucederla en el cargo- respecto de quienes no recibieron el beneficio. Estos resultados confirman que el retorno electoral de la AUH en Argentina únicamente le pertenece a Cristina Kirchner. La estimación también muestra que los receptores de la AUH perciben su economía personal más negativamente en 2015 que en 2011, lo cual no excluye que el hecho de que el efecto económico de las TMC en Argentina persista levemente. Aún cuando hubiera sido deseable medir la percepción de los votantes sobre el manejo que el ejecutivo tiene de la economía, esta pregunta no se encontraba disponible en la ronda 2017. Por este motivo, no es posible descartar que no hubiera habido una peor imagen del gobierno en lo que refiere al manejo la economía entre los beneficiarios.

Ahora bien, la evidencia también confirma que el retorno electoral positivo se diluye en el mediano y largo plazo, transformándose en una mayor confianza sobre los derechos adquiridos para quienes reciben el beneficio, respecto de quienes no lo hacen. En este sentido, los beneficiarios del programa se mostraron 0.30 puntos porcentuales más confiados en que sus derechos están

	Pre matching	Post matching
Educación		
Media tratamiento	9,60	9,60
Media control	11,04	9,60
Ingreso		
Media tratamiento	3,72	3,72
Media control	6,62	3,77
Edad		
Media tratamiento	34,93	34,93
Media control	44,22	35,16
Mujer		
Media tratamiento	0,56	0,56
Media control	0,49	0,55
Blanco		
Media tratamiento	0,47	0,47
Media control	0,57	0,55
Mestizo		
Media tratamiento	0,44	0,44
Media control	0,34	0,35
Nativo		
Media tratamiento	0,01	0,01
Media control	0,02	0,00
AMBA		
Media tratamiento	0,21	0,21
Media control	0,33	0,33
NOA		
Media tratamiento	0,22	0,22
Media control	0,18	0,22
NEA		
Media tratamiento	0,14	0,14
Media control	0,12	0,10
Cuyo		
Media tratamiento	0,20	0,20
Media control	0,11	0,10
Centro		
Media tratamiento	0,26	0,26
Media control	0,22	0,20
Hijos menores 13 años		
Media tratamiento	0,78	0,78
Media control	0,33	0,77

Cuadro 3: Balance pre y post tratamiento (Scioli 2015)

protegidos (en una escala de 1 a 7), un efecto que no se visibilizó en las elecciones de 2011.¹⁴ Nuevamente, estos resultados son coherentes con la literatura que explora los vínculos clientelares de la AUH en Argentina, y sugiere que los beneficiarios, luego de un tiempo, perciben el beneficio como un derecho, cuya continuidad no depende de su conducta en las urnas. Los datos muestran que la recepción del programa tampoco se tradujo un mayor apoyo por el ala kirchnerista del partido peronista ni parece estar mediada por la percepción sobre la corrupción o por la confianza en la gestión de Mauricio Macri como presidente electo. Estimaciones adicionales confirman que el candidato de centro derecha, Mauricio Macri tampoco se benefició (ni perjudicó) por la existencia de la AUH en su elección como presidente (Anexo C). Estos resultados resultan esperables si se tiene en cuenta que -a diferencia de experiencias como México- el candidato de Propuesta Republicana (PRO), no hizo una campaña deliberada en favor de expandir el beneficio ni buscó ampliar la cobertura del programa.¹⁵ En este sentido, no resulta sorprendente que los beneficiarios no relacionen la continuidad o extensión del beneficio con la figura de candidatos a la presidencia que no son Cristina Kirchner.

Tomada en conjunto, la evidencia confirma los hallazgos de la literatura sobre el efecto electoral positivo de corto plazo que generan las Transferencias Monetarias Condicionadas sobre el incumbent que las implementa. En Argentina, la AUH generó un efecto electoral positivo para quien implementó el programa en 2009, Cristina Kirchner, aumentando la confianza en su figura como representante del Ejecutivo y en su manejo de la economía. Los beneficiarios del programa también se mostraron más satisfechos con su propia situación económica, lo que sugiere que el voto egotrópico podría operar en el corto plazo. De hecho, la evidencia empírica existente ha demostrado que no todos votantes se comportan de la misma manera cuando ponderan la economía en sus cálculos electorales. Los votantes más pobres, para quienes la economía tiene un mayor peso en

¹⁴B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político argentino?

¹⁵Cabe mencionar que en Julio de 2015, el Congreso aprobó la ley que establece la actualización automática de los montos de la AUH semestralmente. Sin embargo, no existió una campaña explícita que diera cuenta de este avance en materia de protección social en Argentina. Detalles sobre el contenido de la ley disponibles en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249221/norma.htm>

	ATE	AI-SE	T-stat	p-value
Voto por Scioli (2015)	0,078	0,041	1,889	0,128
Confianza en el Presidente	-0,064	0,192	0,207	0,689
Protección de derechos	0,297	0,160	1,866	0,071
Percepción economía nacional	0,069	0,055	1,235	0,251
Percepción economía personal	0,117	0,064	1,806	0,088
Peronismo (FPV)	0,000	0,025	0,025	0,689
Percepción corrupción	-0,018	0,096	-0,182	0,663
N	1528			
Tratados	378			
Observados	378			

Cuadro 4: Genetic Matching - Efecto medio de tratamiento (ATE) (Scioli 2015)

sus decisiones, suelen estar más pendientes de esta dimensión que otros sectores de la sociedad. Por este motivo, es esperable que la implementación de políticas sociales de alivio a la pobreza, no solo impacte positivamente en las economías familiares de estos grupos, sino también que alteren uno de los componentes centrales que la literatura identifica a la hora de votar retrospectivamente: la claridad sobre quién es el responsable cuando su economía comienza a verse afectada negativamente.

Sin embargo, el retorno electoral de la AUH termina por desaparecer cuando pasa el tiempo y el *incumbent* no se encuentra gobernando. Los datos muestran que el efecto inicial sobre Cristina Kirchner no pudo ser capturado por su candidato, Daniel Scioli, en las elecciones posteriores, aun cuando éste prometió extender sus beneficios y actualizar los montos del programa si alcanzaba la presidencia. Los resultados sugieren que, a medida que pasa el tiempo, las TMC dejan de tener un impacto económico positivo en el que se concentran los adultos beneficiarios, y se transforman en derechos adquiridos. Por este motivo, es esperable que la AUH ya no genere un retorno electoral positivo, si la situación personal de los hogares beneficiarios se estabiliza y éstos creen que recibir

el beneficio no está atado a un voto favorable al partido que lo implementó en un primer momento, tal como ocurrió en el caso del *PANES* en Uruguay (Manacorda et al., 2011) y del *Bolsa Familia* en Brasil (Zucco, 2015).

6. Conclusión

El supuesto de que los votantes recompensan a los políticos por su buen desempeño en el cargo y los castigan por una mala gestión convierte a las elecciones en un fuerte incentivo para ajustar las políticas que implementan a las preferencias de sus electores. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que gran parte de esta decisión está mediada por la percepción que tienen los ciudadanos sobre la economía a la hora de votar.

Conscientes de estos desafíos, los políticos no solo intentan desprenderse de decisiones que los puedan perjudicar en las urnas, sino que, en reiteradas ocasiones, intentan reclamar el crédito por políticas que beneficien su imagen e impacten positivamente en su voto. Si es cierto que algunas políticas o medidas son capaces de generar reacciones en los votantes de más largo plazo, la expectativa es que los políticos también puedan intentar apropiarse del crédito por políticas que no implementaron ellos mismos, pero que generan efectos positivos en los beneficiarios más allá del corto plazo.

Las Transferencias Monetarias Condicionadas adquieren especial relevancia para poner a prueba estos argumentos. Implementadas por primera vez en América Latina durante la década de 1990, fueron la estrategia preferida de los gobiernos de la región para combatir las consecuencias desastrosas de sucesivas crisis económicas sobre las poblaciones más vulnerables. Su distribución garantizó la inyección inmediata de dinero en efectivo en hogares pobres y extremadamente pobres, condicionado al cumplimiento de ciertas contraprestaciones en materia de salud y educación de los menores a cargo. De esta forma, los sectores más empobrecidos vieron aumentada su capacidad de consumo en el corto plazo, mejorando sus ingresos en el corto plazo. Estos esfuerzos se tradujeron en resultados positivos sobre la pobreza y la desigualdad, pero despertaron severas

críticas de todo el arco político y parte de opinión pública sobre los riesgos que su implementación suponía al volver a una cultura de manipulación política y apropiación del crédito electoral por parte de los presidentes que las implementaron en un primer momento.

El cuestionamiento en torno a los efectos electorales de corto plazo rápidamente llamó la atención de los especialistas que coinciden que, en su gran mayoría, los programas de TMC efectivamente mejoran la performance electoral de los candidatos que las implementaron. Estos hallazgos fueron corroborados no solo en América Latina, sino también en otras partes del mundo donde se implementaron (Aytak, 2014; Baez et al., 2012; De la O, 2013; 2015; Díaz-Cayeros et al., 2009; Galiani et al., 2019; Hunter y Power, 2007; Labonne, 2013; Lício et al., 2009; Manacorda et al., 2011; Nicolau y Peixoto, 2007; Nupia, 2011; Pop-Eleches y Pop-Eleches, 2012; Queirolo, 2011; Sewall, 2008; Soares y Terron, 2010; Zucco, 2008; 2011; Zucco y Power, 2011). Ahora bien, lejos de durar para siempre, estos efectos electorales de corto plazo parecen diluirse a medida que pasa el tiempo (Díaz Cayeros et al., 2009, Manacorda et al., 2011; Zucco, 2013; 2015).

Este trabajo provee evidencia que confirma el retorno electoral positivo de la Asignación Universal por Hijo en el corto plazo, pero pone en duda que su efecto perdure en el largo plazo. Los hallazgos sugieren que el programa tuvo un efecto positivo sobre el voto por el candidato que las implementó inicialmente, Cristina Kirchner, en las elecciones presidenciales de 2011. Lejos de tener un efecto únicamente favorable al *incumbent*, los beneficiarios del programa también fueron más propensos a confiar en la gestión económica de la Presidenta y a tener una perspectiva más favorable sobre su propia economía, respecto de quienes no recibieron el beneficio. Esto podría deberse a que en el corto plazo, las TMC operan reforzando el voto egotrópico entre los votantes más pobres. De hecho, es esperable que los votantes más expuestos a los vaivenes del ciclo económico, sean a quienes más les importa la economía (Hellwig, 2001; Dorussen y Taylor, 2002; Singer, 2011). Por este motivo, la implementación de políticas sociales que mejoran el bienestar de sectores vulnerables en momentos de crisis juega un rol central en estas explicaciones (Pacek y Radcliff, 1995; Singer, 2011).

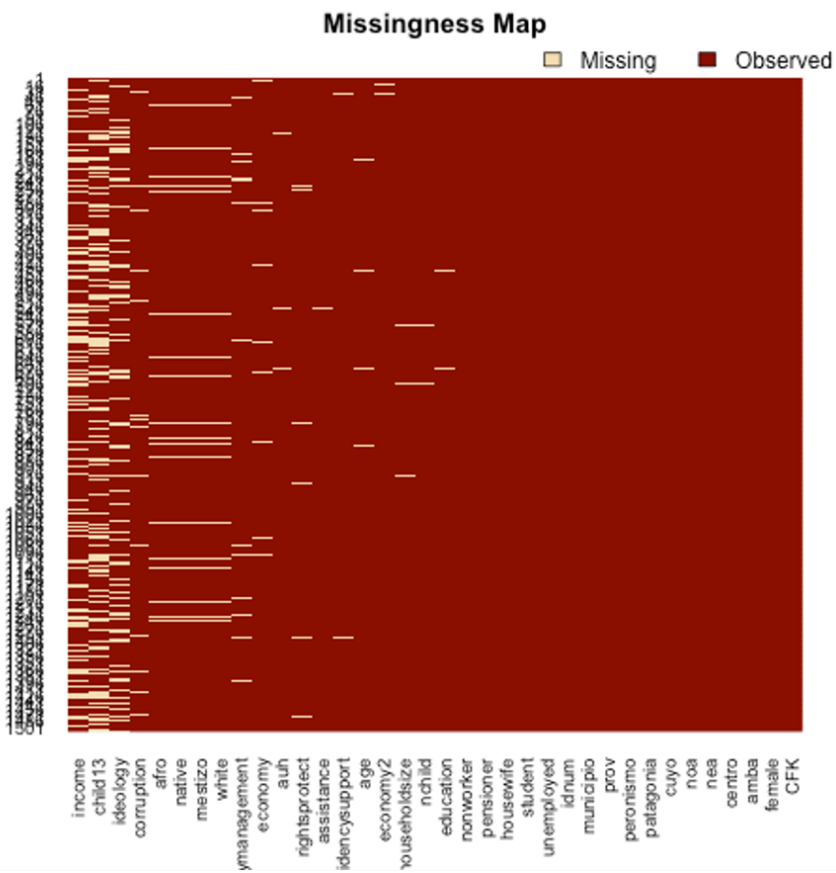
Sin embargo, el efecto positivo observado en el corto plazo, no se tradujo en una mejora en la performance electoral del candidato del Frente para la Victoria en 2015. La evidencia sugiere que en el largo plazo la distribución del beneficio pierde fuerza como inyección de dinero en los hogares pobres, y es reemplazada por una perspectiva donde la recepción de la AUH es vista como un derecho adquirido, consistente con la literatura que sugiere que su distribución no siguió una lógica clientelar en Argentina, sino que fue implementada en clave de derecho (Lodola, 2011; Zarazaga, 2014; 2015).

Los hallazgos coinciden con la literatura que argumenta que las TMC generan retornos electorales para los titulares que las implementan en un primer momento. En el caso de Argentina, sin embargo, su efecto no parece ser suficiente para ganar las elecciones en el largo plazo. De hecho, la única que logró capturar un efecto electoral positivo por la implementación de la AUH fue Cristina Kirchner. Aún cuando la información disponible resulta considerablemente escasa, estos resultados podrían ser indicios que estos programas funcionan efectivamente como mecanismos que promueven la participación electoral de ciertos sectores políticamente más apáticos. Más aún, se trata de una contribución que permite entender mejor cómo estos resultados impactan sobre las estrategias políticas de quienes gobiernan, y confirma que los mecanismos que operan detrás de los beneficiarios de estos programas no es estática, sino que varía con el tiempo de implementación del programa. Sería ideal poder replicar estas estimaciones en las elecciones presidenciales de 2019 para trazar una trayectoria relativa a los efectos electorales de las TMC de más largo plazo. En esta última, Cristina Kirchner se presentó como vicepresidenta del candidato peronista, Alberto Fernández, resultando electos por encima de Mauricio Macri. Lamentablemente, hasta donde tengo conocimiento no existe información disponible que permita replicar estos resultados en 2019. La ronda LAPOP 2018-19 tuvo lugar antes de la elección presidencial de 2019, y pregunta a los encuestados por las elecciones de 2015, por lo que tampoco existen datos disponibles sobre éstas última.

Anexos

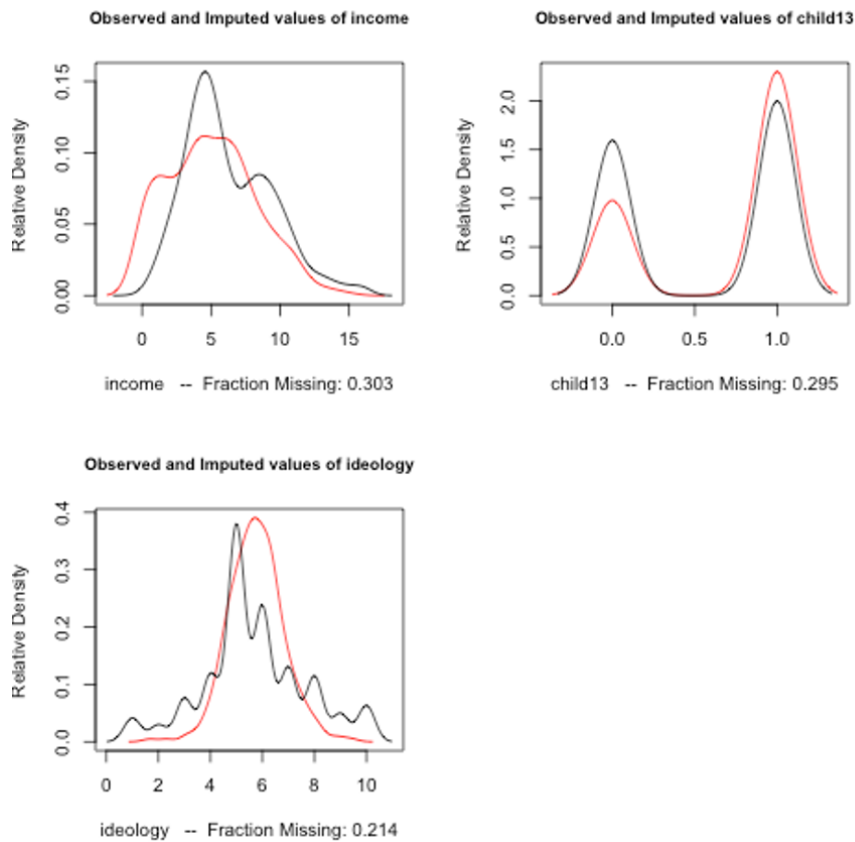
Anexo A

Mapa de datos pedidos (LAPOP 2012)



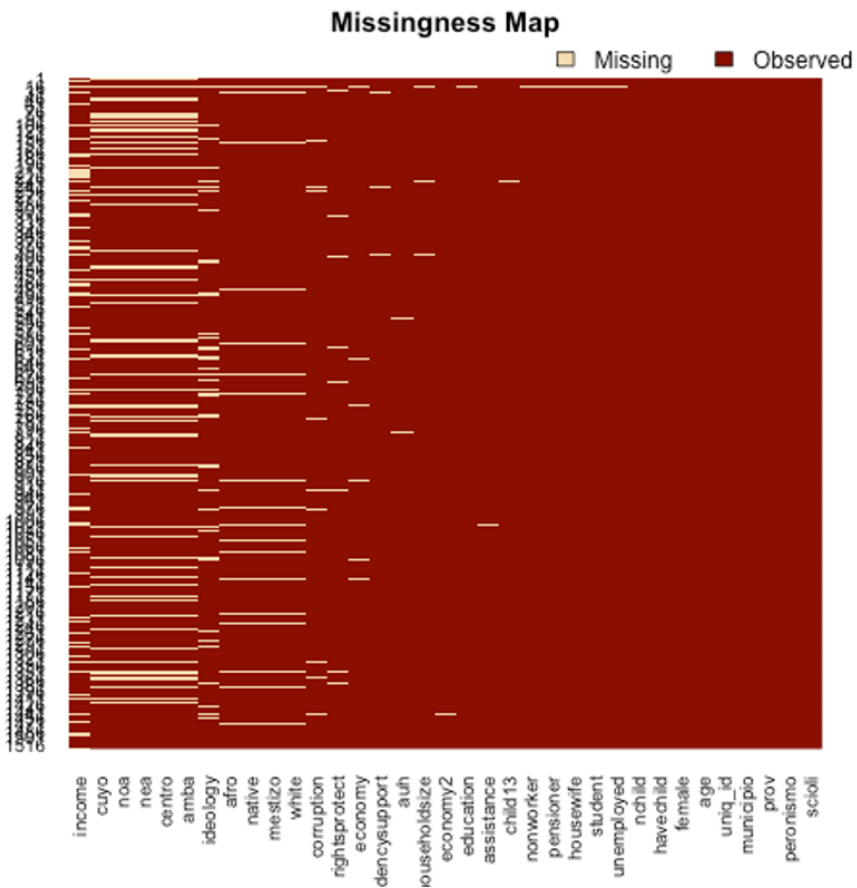
Nota: Variables seleccionadas LAPOP 2012

Distribución de valores imputados y observados (LAPOP 2012)



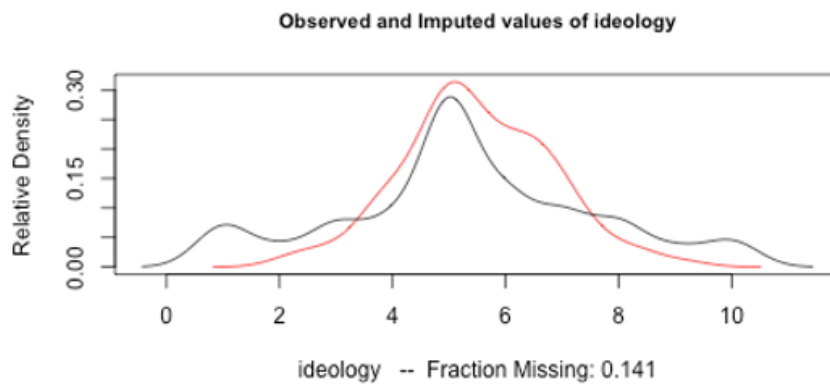
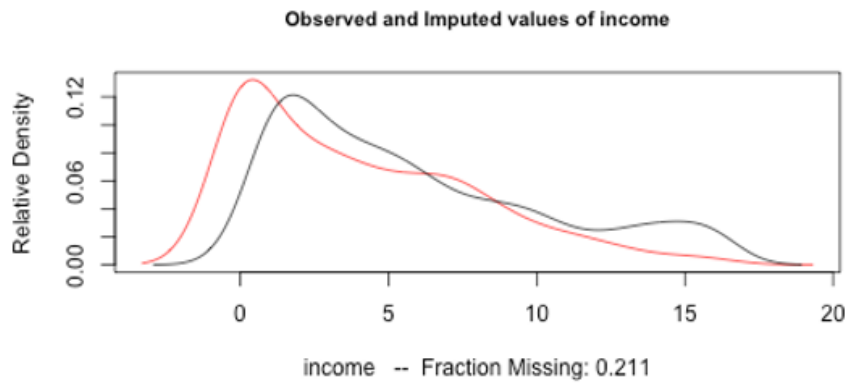
Nota: Distribución de variables con mayor porcentaje de datos perdidos: ingreso (income), cantidad de hijos menores de 13 años en el hogar (child13) e ideología (ideology). Referencia sobre valores observados (negro) y valores imputados (rojo) utilizando el paquete Amelia (R).

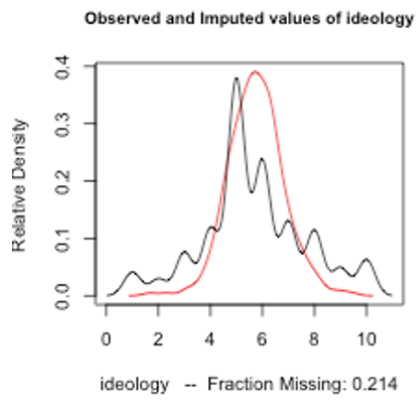
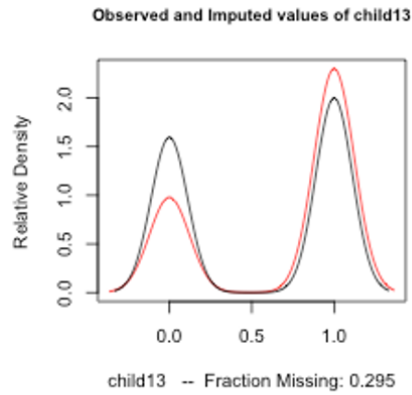
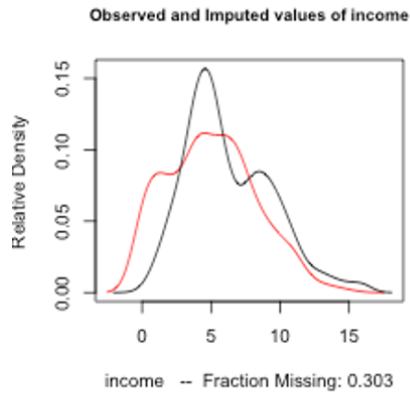
Mapa de datos pedidos (LAPOP 2017)



Nota: Variables seleccionadas (LAPOP 2017)

Distribución de valores imputados y observados (LAPOP 2017)





Nota: Distribución de las variables con mayor porcentaje de datos perdidos: ingreso (income), zonas del país e ideología (ideology). Referencia sobre valores observados (negro) y valores imputados (rojo) utilizando el paquete Amelia (R).

Anexo B

Cuestionario LAPOP 2012

Variable dependiente

VB3. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2011? (00) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco, arruinó o anuló su voto)

(1701) Cristina Fernández de Kirchner - Frente para la Victoria

(1702) Hermes Binner – Frente Amplio Progresista

(1703) Ricardo Alfonsín – Unión para el Desarrollo Social

(77) Otro

(88) NS

(98) NR

(99) INAP (No votó)

En esta tarjeta hay una escalera con escalones numerados del uno al siete, en la cual el 1 es el escalón más bajo y significa NADA y el 7 es el escalón más alto y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un puntaje de 1. Si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión esté entre nada y mucho elegiría un puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Léame el número. [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].)

B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?

B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político argentino?

N15. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual está manejando bien la economía?

SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?

(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (88) NS (98) NR

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?

(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (88) NS (98) NR

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país está:[LEER]

(1) Muy generalizada (2) Algo generalizada (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada (88) NS (98) NR

VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO LEER LISTA, sondear solo si responde “Justicialismo o Peronismo”]

(1701) Frente para la Victoria (Justicialismo Kirchnerista)

(1702) Partido Justicialista (Duhaldismo, otros no Kirchneristas)

(1703) Unión Cívica Radical

(1704) Partido Socialista

(1705) PRO

(1706) Proyecto Sur

(1707) Partido provincial en el gobierno (ejemplo MPN)

(77) Otro

(88) NS

(98) NR

(99) INAP

Variable independiente

CCT1B. Ahora, hablando específicamente sobre el Programa “Asignación Universal por Hijo”, ¿usted o alguien en su casa es beneficiario de ese programa?

(1) Sí (2) No (88) NS (98) NR

Cuestionario LAPOP 2017

Variable dependiente

VB3. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2011? (00) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco, arruinó o anuló su voto)

(1701) Cristina Fernández de Kirchner - Frente para la Victoria

(1702) Hermes Binner – Frente Amplio Progresista

(1703) Ricardo Alfonsín – Unión para el Desarrollo Social

(77) Otro

(88) NS

(98) NR

(99) INAP (No votó)

En esta tarjeta hay una escalera con escalones numerados del uno al siete, en la cual el 1 es el escalón más bajo y significa NADA y el 7 es el escalón más alto y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un puntaje de 1. Si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho elegiría un puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Léame el número. [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].

B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?

B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político argentino?

SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?

(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (88) NS (98) NR

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?

(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (88) NS (98) NR

EXC7NEW. Pensando en los políticos de Argentina, ¿cuántos de ellos están involucrados en corrupción? [Leer alternativas]

(1) Ninguno

(2) Menos de la mitad

(3) La mitad de los políticos

(4) Más de la mitad

(5) Todos

(888888) No sabe [NO LEER]

(988888) No responde [NO LEER]

B11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? [NO Leer alternativas]

(1701) Frente para la Victoria (Justicialismo Kirchnerista)

(1702) Partido Justicialista (Massismo, otros no Kirchneristas)

(1703) Unión Cívica Radical

(1704) Partido Socialista (aceptar GEN)

(1705) PRO

(1706) Partido provincial en el gobierno (ejemplo MPN)

(1707) Partido de izquierda (PO, Frente de Izquierda, MAS, etc.)

(1777) Otro

(888888) No sabe [NO LEER]

(988888) No responde [NO LEER]

(999999) Inaplicable [NO LEER]

Variable independiente

CCT1B. Ahora, hablando específicamente sobre el Programa “Asignación Universal por Hijo”, ¿usted o alguien en su casa es beneficiario de ese programa?

(1) Sí (2) No (88) NS (98) NR

Anexo C

	Pre matching	Post matching
Educación		
Media tratamiento	9,62	9,62
Media control	11,04	9,82
Ingreso		
Media tratamiento	3,81	3,81
Media control	6,63	3,81
Edad		
Media tratamiento	34,90	34,90
Media control	44,19	35,66
Mujer		
Media tratamiento	0,56	0,56
Media control	0,49	0,56
Blanco		
Media tratamiento	0,46	0,46
Media control	0,58	0,46
Mestizo		
Media tratamiento	0,43	0,43
Media control	0,34	0,46
Nativo		
Media tratamiento	0,01	0,01
Media control	0,02	0,03
AMBA		
Media tratamiento	0,22	0,22
Media control	0,34	0,30
NOA		
Media tratamiento	0,22	0,22
Media control	0,17	0,20
NEA		
Media tratamiento	0,14	0,14
Media control	0,12	0,14
Cuyo		
Media tratamiento	0,19	0,19
Media control	0,11	0,17
Centro		
Media tratamiento	0,26	0,26
Media control	0,24	0,17
Hijos menores 13 años		
Media tratamiento	0,78	0,78
Media control	0,33	0,78

Cuadro 5: Balance pre y post tratamiento (Macri 2015)

	ATE	AI-SE	T-stat	p-value
Voto por Macri (2015)	-0,018	0,037	-0,470	0,576
Confianza en el Presidente	-0,070	0,189	-0,354	0,560
Protección de derechos	0,242	0,163	1,494	0,234
Percepción economía nacional	0,075	0,056	1,346	0,200
Percepción economía personal	0,093	0,064	1,442	0,156
Peronismo (FPV)	-0,001	0,025	-0,015	0,608
Percepción corrupción	0,006	0,092	0,072	0,712
N	1528			
Tratados	377			
Observados	377			

Cuadro 6: Genetic Matching - Efecto medio de tratamiento (ATE) (Macri 2015)

Bibliografía

Abadie, A. e Imbens, G. W. (2016). Matching on the Estimated Propensity Score. *Econometrica*, 84 (2), 781-807.

Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSeS). (2020). Argentina. Datos abiertos. Recuperado de: <https://www.anses.gov.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales>

Aytaç, S. E. (2014). Distributive Politics in a Multiparty System: The Conditional Cash Transfer Program in Turkey. *Comparative Political Studies*, 47 (9), 1211-37.

Baez, J., Camacho, A., Conover, E. y Zárate, R. (2012). Conditional Cash Transfers, Political Participation, and Voting behavior. *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 6870, 1-10.

Banco Central de la República Argentina (BCRA). Cotización del dólar a 30 de diciembre de 2019. Recuperado de http://www.bcr.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Planilla_cierre_de_cotizaciones.asp.

- Banco Central Del Ecuador. (2020). Cuentas Nacionales Regionales. Recuperado de: <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantoniales/Indice.htm>.
- Bohn, S. R. (2013). The Electoral Behaviour of the Poor in Brazil: A Research Agenda. *Latin American Research Review*, 48(2),25-31.
- Bohn, S. R. (2011). Social Policy and Vote in Brazil: Bolsa Família and the Shifts in Lula ' s Electoral Base. *Latin American Research Review*, 46 (1), 54-79.
- Cardoso, E. y Portela Souza, A. (2004). The Impact of Cash Transfers on Child Labor and School Attendance in Brazil. *Vanderbilt University Department of Economics, Working Papers 0407*.
- Cruces, G. y Gasparini, L. (2008). Programas Sociales en Argentina: Alternativas para la Ampliación de la Cobertura. *Documento de Trabajo, No.77. Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), La Plata*.
- de Hoop, J. y Rosati, F. c. (2014). Cash Transfers and Child Labor. *Policy Research Working Paper No. 6826*. World Bank, Washington, DC. World Bank.
- De La O, A. (2013). Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico. *American Journal of Political Science*, 57 (1), 1-14,
- . (2015). Crafting Policies to End Poverty in Latin America. En *Crafting Policies to End Poverty in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diamond, A. y Sekhon, J. (2013). Genetic Matching for Estimating Causal Effects: Balance in Observational Studies. *Review of Economics and Statistics*, 95, 932-45.
- Díaz- Cayeros, A., Estevez, F. y Magaloni, B. (2009). Welfare Benefits, Canvassing, and Campaign Handouts. En *Consolidating Mexico's Democracy: The 2006 Presidential Campaign in Comparative Perspective*. Domínguez, J., Lawson, C. y Moreno, A. (Eds.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 229-45.
- Dorussen, H. y Taylor, M. (2002). *Economic Voting*. Psychology Press.

- Galiani, S., Hajj, A., McEwan, P., Barrarán, P. y Krishnaswamy, N. (2019). Voter Response to Peak and End Transfers: Evidence from a Conditional Cash Transfer Experiment. *American Economic Journal: Economic Policy*, 11 (3), 232-60.
- Gertler, P. J., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L. y Vermeersch, C. (2011). Impact Evaluation in Practice. Second Edition. Washington, DC: Inter-American Development Bank and World Bank.
- Green, T. (2006). Do Social Transfer Programs Affect Voter Behavior? Evidence from Progresa in Mexico. *Unpublished manuscript*. University of California, Berkley.
- Guarnieri, F. y Limongi, F. (2015). Nas eleições presidenciais no Brasil. *Opinio Publica*, 21 (1), 60-86.
- Handlin, S. (2013). Social Protection and the Politicization of Class Cleavages During Latin America's Left Turn. *Comparative Political Studies*, 46 (12), 1582-1609.
- Hellwig, T. (2001). Interdependence, Government Constraints, and Economic Voting. *The Journal of Politics*, 63(4), 1141-1162.
- Holland, P. (1986). Statistics and Causal Inference. *Journal of the American Statistical Association*, 81(396), 945-960.
- Hunter, W. y Power, T. (2007). Rewarding Lula: Executive power, social policy, and the Brazilian elections of 2006. *Latin American Politics and Society*, 49 (1), 1-30.
- Imai, K., King, G. y Velasco Rivera, C. (2020). Do nonpartisan programmatic policies have partisan electoral effects? Evidence from two large-scale experiments. *Journal of Politics*, 82 (2), 714-30.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. (2019). Informe Técnico Mensual. Recuperado de: <https://www.indec.gob.ar/>
- King, G., Honaker, J., Joseph, A. y Scheve, K. (2001). Analyzing incomplete political science data: An alternative algorithm for multiple imputation. *American Political Science Review*, 95 (1), 49-69.

King, G. y Honaker, J. (2010). What to Do about Missing Values in Time-Series Cross-Section Data. *American Journal of Political Science*, 54(2), 561–581.

Labonne, J. (2013). The local electoral impacts of conditional cash transfers. Evidence from a field experiment. *Journal of Development Economics*, 104, 73-88.

Latin American Public Opinion Project, LAPOP. Vanderbilt University. Recuperado de: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>

Levitsky, S. y Murillo, M.V. (2008). Argentina: From Kirchner to Kirchner. *Journal of Democracy*, 19 (2), 16-30.

Licio, E., Rennó, L y De Castro, E. (2009). Bolsa Família e voto na eleição presidencial de 2006: em busca do elo perdido. *Opinioao Publica*, 15 (1), 31-54.

Lindert, K., y Vincensini, V. (2010). Social Policy, Perceptions and the Press: An Analysis of the Media's Treatment of Conditional Cash Transfers in Brazil. *Social Protection Discussion Papers and Notes 70613*, The World Bank.

Lodola, G. (2011). Los condicionantes políticos de la distribución de transferencias de ingreso en Argentina. *IV Congreso Latino Americano de Opinião Pública da WAPOR*, 0-29.

Lodola, G. y Seligson, M. (2012). *Cultura política de la democracia en Argentina y en las Américas: Hacia la igualdad de oportunidades*. Vanderbilt University.

Lupu, N. y Stokes, S. (2009). The Social Bases of Political Parties in Argentina, 1912–2003. *Latin American Research Review*, 44, 58-87.

Manacorda, M., Miguel, E. y Vigorito, A. (2011). Government Transfers and Political Support. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3 (3), 1-28.

Montero, A. (2010). No Country for Leftists? Clientelist Continuity and the 2006 Vote in the Brazilian Northeast. *Journal of Politics in Latin America*, 2 (2), 113-53.

N/A, "La 125. El conflicto que cambió el destino del kirchnerismo", *Diario Perfil*. 17 Julio, 2018.

Recuperado de: <https://www.perfil.com/noticias/politica/la-125-el-conflicto-mas-fuerte-que-hizo-tuvo-cristina-kirchner-en-8-anos-de-gobierno.phtml>

Nicolau, J. y Peixoto, V. (2007). As bases municipais da votação de Lula em 2006. Quem Elegeu Lula? - As forças e fatores políticos que levaram aos 60 milhões de votos. *Cadernos Fórum Nacional 6. Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE)*, 15-26.

Nupia, O. (2012). Anti-Poverty Programs and Presidential Election Outcomes: Familias en Acción in Colombia. *Serie Documentos Cede*, 76.

Pacek, A. y Radcliff, B. (1995). Economic voting and the welfare state: A cross-national analysis. *The Journal of Politics*, 57 (1), 44-61.

Pavão, N. (2016). Conditional Cash Transfer Programs and Electoral Accountability: Evidence from Latin America. *Latin American Politics and Society*, 58 (2), 74-99.

Pop-Eleches, C. y Pop-Eleches, G. (2012). Targeted government spending and political preferences. *Quarterly Journal of Political Science*, 7 (3), 285-320.

Queirolo, R. (2011). El impacto de los programas de transferencia de dinero en las elecciones uruguayas del 2009. En *IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR Belo Horizonte-Brasil Área*.

Regímenes de Asignaciones Familiares. Ley 27.160. Asignaciones Familiares. Movilidad.(Julio 2015). Recuperado de: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249221/norma.htm>

Rosati, F. (2016). Can cash transfers reduce child labor?. *IZA World of Labor, Institute of Labor Economics (IZA)*, 293-293.

Rosenbaum, P. y Rubin, D. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrics*, 70 (1), 41-55.

- Sekhon, J. (2011). Multivariate and Propensity Score Matching. *Journal of Statistical Software*, 42 (7), 1-52.
- Sewall, R. (2008). Conditional Cash Transfer Programs in Latin America. *SAIS Review of International Affairs*, 28 (2), 175-87.
- Singer, M. (2011). Who Says “It’s the Economy”? Cross-National and Cross-Individual Variation in the Salience of Economic Performance. *Comparative Political Studies*, 44 (3), 284-312.
- Skoufias, E. y Parker, S. (2001). Conditional Cash Transfers and Their Impact on Child Work and Schooling: Evidence from the PROGRESA Program in Mexico. *Economia*, 2(1), 45-86.
- Terron, S. y Soares, G. (2010). As bases eleitorais de lula e do PT: Do distanciamento ao divórcio. *Opinioao Publica*, 16 (2), 310-37.
- Zarazaga, R. (2014). Brokers Beyond Clientelism: The Case of the Peronist Hegemony. *Latin American Politics and Society*, 56 (3).
- . (2015). Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en Argentina: Análisis sobre el alcance, las condicionalidades y el clientelismo en la Asignación Universal Por Hijo y el programa Argentina Trabaja. *Desarrollo Económico*, 54 (214), 333-56.
- Zucco, C. (2008). The president’s “new” constituency: Lula and the pragmatic vote in Brazil’s 2006 presidential elections. *Journal of Latin American Studies*, 40 (1), 29-49
- . (2011). Conditional cash transfers and voting behavior: Redistribution and clientelism in developing democracies. *Princeton University*, 1-36.
- . (2013). When Payouts Pay Off: Conditional Cash Transfers and Voting Behavior in Brazil 2002-10. *American Journal of Political Science*, 57 (4), 810-22.
- . (2015). The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014). *Brazilian Political Science Review*, 9 (1), 135-49.

Zucco, C. y Power, T. (2013). Bolsa Família and the shift in Lula's electoral base, 2002-2006: A reply to Bohn. *Latin American Research Review*, 48 (2), 3-24.